

La amarga verdad^{*}

Mabel Thwaites Rey

Para evaluar si tales o cuales medidas económicas mejoran o empeoran la crisis es preciso hacer algunas aclaraciones conceptuales básicas que, no por ser conocidas, merecen menor atención.

Toda decisión que se tome desde el estado es, por definición, una acción política, en el sentido de que expresa una voluntad definida desde el poder. Pero como el poder del estado no es algo autónomo de los actores sociales, lo que en realidad expresa es la relación de fuerzas existente en cada momento histórico particular. Es decir que lo que el estado hace es el efecto complejo de las voluntades que logran imponerse en él. Cuando, por ejemplo, se decide pesificar uno a uno todas las deudas, con independencia del monto y las características de los deudores -hipotecarios o empresas, chicos o grandes-, queda claro que la presión de los intereses de los grandes grupos endeudados primó por sobre los de otros actores sociales, porque el costo asumido con esta medida se carga sobre el estado y, en definitiva, lo paga el conjunto de la sociedad.

Entonces, las medidas políticas se toman en función de las relaciones de fuerzas ya constituidas o dirimidas en el momento en que son tomadas. Sin embargo, los planes o medidas económicas también suponen apuestas a futuro, en función de hipótesis que la realidad se encargará de confirmar o desmentir. Los economistas suelen manejar variables que se suponen más o menos fijas y que asumen como dato el comportamiento previsible de los agentes económicos según los incentivos que tal o cual decisión promoverá. Cavallo, por ejemplo, adujo que al bajar los aportes patronales se estimularía a las empresas a invertir más y a tomar más trabajadores.

Más allá de la perversidad que pueda achacársele al otrora todopoderoso ministro, sus decisiones se basaron sobre premisas teóricas: si le quito impuestos al trabajo, el empresario estará más estimulado para invertir y arriesgarse a tomar trabajadores. Lo mismo se aducía con la flexibilidad laboral: a menos restricciones para el empleo, más puestos de trabajos. Pero como la realidad suele ser mucho más compleja que las teorías, muestra que el conjunto de los actores no reaccionan ingenuamente ante el estímulo previsto. Es más, los que perciben una amenaza se defienden de ella y los que ven una oportunidad para obtener un beneficio, la toman sin dudar. Cuando los supuestos teóricos no se verifican, hay una tendencia muy arraigada a acusar a la realidad -o, más precisamente, a los actores sociales- por su pertinaz obstinación en no adecuarse al paradigma. Siempre se encuentran excusas para exculpar a la teoría, sobre todo si esta es hegemónica, como en el caso del neoliberalismo.

Las teorías siempre son conjuntos de supuestos que se extraen de la realidad, pero que no son la realidad misma, porque suponen valoraciones muy fuertes sobre lo que aquélla es y sobre cómo debería ser. El mejor efecto ideológico es hacer creer que lo que una teoría dice que la realidad es sea creído por la sociedad como algo no sólo cierto, comprobable con la experiencia, sino bueno, deseable, perseguible. Entonces, puede aparecer como "objetivo" lo que expresa una determinada valoración.

Durante los '80 y '90 el neoliberalismo ganó la batalla por el "sentido" de las prácticas sociales, al convencer a la mayoría de las sociedades del planeta de las bondades de su

^{*} Publicado en Realidad Económica N° 187, 1° de abril al 15 de mayo de 2002, Buenos Aires

proyecto, enraizado en muchos elementos del sentido común dominante: si se respeta y alienta la propiedad privada sin restricciones, habrá crecimiento y bienestar. Si se privatiza, desregula, se achica el estado, se abren los mercados, se permite la circulación libre e irrestricta del capital, la consecuencia de estos fundamentos teóricos de la economía "sana" será el crecimiento imparable, la bonanza y la prosperidad general.

Lo más interesante es cómo se logró mostrar una determinada forma de organización social, el capitalismo en su versión neoliberal, no sólo como buena, como la mejor, sino como la única racionalmente posible. Entonces, si la propiedad privada absoluta e irrestricta - fundamento de la libertad y el bienestar- no puede discutirse más, el corolario es que hay que encontrar los mecanismos para expandirla lo máximo posible.

El "fracaso" material del neoliberalismo, en el sentido de los logros que prometió y no cumplió para la mayoría de la sociedad -porque, por definición, no puede cumplir-, es directamente proporcional al éxito alcanzado en su objetivo verdadero y de máxima: concentrar la riqueza y acrecentar el poder del capital mundial. Las cifras de concentración de la riqueza y agravamiento de la pobreza mundial de los últimos 20 años son escalofrantes e incontrastables.

Lo interesante es que para poder expandirse, el poder requiere alguna base de legitimación: no puede pararse y decir que lo que persigue verdaderamente es beneficiar a unos pocos y hambrear a la inmensa mayoría. Tiene que ser capaz de convencer de que sus principios contribuirán al bienestar de todos. La verosimilitud de tal propuesta, que está en la base de su hegemonía en los años 80 y 90, estuvo dada por las genuinas limitaciones de los estados de bienestar de posguerra para cumplir con sus promesas de igualdad social generalizada.

El sentido común registraba la insatisfacción ciudadana con el desempeño de los estados, en la provisión de bienes y servicios. Sobre esa base, el neoliberalismo montó una ofensiva en la cual identificó al estado como causante de todos los males y, a cambio, propuso la gestión privada más amplia posible. Claro, porque si las tareas a cargo del estado son menores, también deben serlo los recursos destinados a solventarlas. Ergo, se pagarán menos "expensas comunes", es decir, impuestos. Es evidente que quienes tienen que pagar -los que tienen con qué contribuir- siempre estarán más gustosos de sacar de sus bolsillos una porción menor.

Pero una vez desplegado con todas sus fuerzas, el modelo neoliberal dejó al descubierto el verdadero tendal que suponen sus recetas... La verdad se hizo inocultable y las bondades de la globalización se trocaron en la amarga verdad de la desigualdad acrecentada en escala planetaria.

El caso argentino

El caso argentino es paradigmático. Lo fue por la radicalidad con que se asumieron las premisas neoliberales y lo es por el estrepitoso fracaso del que nadie quiere hacerse cargo.

El dato crucial hoy es que no hay un proyecto que pueda erigirse como hegemónico, en el sentido de lograr un consenso amplio. No hay discurso validable a la manera de los noventa: privaticen, desregulen, abran su economía y pasarán al club del primer mundo. Hoy, sin mucha alharaca, nos mandan más de lo mismo. Nos mandan un indio con cara de poker a recitar el sonsonete de la administración republicana. Ni siquiera se cuidan de guardar las apariencias y la brutal primacía norteamericana en el Fondo no pretende ser disimulada. Los representantes del Fondo manifiestan su preocupación por cuidar las inversiones estadounidenses. En tanto, dirimen su sorda y permanente disputa con los

Europeos y pretenden poner un cordón de seguridad alrededor de la Argentina para que no contagie ni a vecinos ni al resto del mundo.

La postura de la administración de George Bush no podría ser más clara. En la cumbre de Monterrey manifestaron abiertamente su negativa a aumentar la contribución de los países ricos para combatir la pobreza. Tras el atentado del 11 de setiembre la postura no admite dudas: la prepotencia del poder se dirimirá en los términos más brutales. La represión física es el camino. Lejos de toda lógica que indicaría que a la insatisfacción de los pueblos sometidos hay que paliarla con ayuda material concreta, la respuesta es un redoblamiento de la fuerza. Como no hay legitimación posible después de 20 años e experiencias neoliberales, la respuesta es la represión. Fíjense: a la Argentina, alumno dilecto, ni un peso.

En tanto, se involucran con todo en el conflicto de Colombia. El momento es muy peligroso, porque el mensaje parecería ser que no les importa si en la Argentina hay una escalada de violencia social y política. Por eso le piden a un gobierno débil autoridad política para imponer medidas que se descuenta generarán descontento y protestas. Pedir lo imposible equivale a no temer que el paso siguiente es la represión.

Por estos lares, la crisis de hegemonía en el bloque de poder sigue abierta. Como dice Basualdo, se rompió la alianza articulada en los noventa y hoy un bloque pretende la dolarización para salvar sus inversiones y rentabilidad, mientras el otro quiere la devaluación para valorizar sus exportaciones y los activos fugados. Para ambos, la variable de ajuste es la inmensa mayoría de la sociedad, que tendrá que pagar la cuenta. El dato significativo es que esta vez ninguno plantea un compromiso, por mínimo que fuera, con los sectores medios -vía cierto nivel de empleo y consumo-, que podría otorgar alguna legitimación, ni tampoco se arriesgan en serio a realizar algún compromiso con los sectores más pauperizados, para lo que tendrían que resignar recursos destinados a la distribución de un ingreso mínimo, vía las prácticas clientelares tradicionales. Hoy parece primar el todos contra todos y el sálvese quien pueda. Pero nadie exhibe capacidad o vocación de liderazgo. Como telón de fondo, el FMI y Estados Unidos no atinan a una receta que sea políticamente sustentable. Quieren usarnos de conejos de indias para disciplinar a todos los demás países endeudados.

Por eso, la pregunta es ¿de qué medidas económicas estamos hablando? Y la pregunta pertinente sería: ¿hay espacio para medidas no neoliberales? Porque se sabe con certeza a qué conducen las recetas clásicas que hoy nos pide el FMI para obtener algo de ayuda: a salvar las papas de los intereses dominantes. Implican hacer crecer la pobreza en la Argentina hasta límites insospechados. Y después, se verá.

Los otros caminos, sin embargo, exigen una firmeza política y decisión social muy grandes. Podríamos enumerar medidas de todo tipo. Pero incluso las más elementales, desde una lógica capitalista levemente apartada de la receta neoliberal, requieren de mucha fuerza social para respaldarlas.

¿"Seguridad jurídica" o "seguridad política"?

Cuando comenzó este proceso de reestructuración neoliberal, creo que muchos de los aquí presentes auguramos las terribles consecuencias sociales que ello traería. Aun a riesgo de ser tildados de agoreros o ideológicos. Muchos académicos creyeron, o prefirieron creer, que el esquema neoliberal funcionaría no solo económicamente, sino con plafón político duradero. A su favor jugaba que las promesas de la salida neoliberal primermundista en un comienzo fueron aceptadas por la mayoría de la sociedad. Salir de la hiperinflación

recuperar capacidad de ahorro y consumo eran datos materiales muy concretos sobre los cuales pudo asentarse la legitimación inicial.

En cambio los costos, profundos pero menos visibles, más solapados, se prefirió verlos como transitorios o, en su caso, ignorarlos como un mal que pagarían otros, los pobres de siempre (que para eso ya están acostumbrados y la realidad es así, hermano. El mundo es cruel y sobrevive el más apto (seguro, yo zafo). Muchos creyeron que podían estar del lado de los que se salvaban.

Advertimos entonces lo que significaría el desguace del estado, no sólo en términos económicos concretos por rematar a precio vil capital socialmente acumulado, sino en el desbalance de poder social que significaba entregar tamaño poder relativo a grupos concentrados y transnacionalizados.

Luego, el proceso se profundizó con la extranjerización de la economía, y advertimos lo difícil que iba a ser no contar con actores capitalistas de peso con algún grado de compromiso o anclaje con la suerte de la sociedad acotada en el espacio territorial nacional. Ser inversores no residentes desresponsabiliza totalmente de la suerte de la cotidianidad social. Un espacio vivible y no sólo rentable puede interesarle a quien está arraigado en él y no a quien meramente lo utiliza para la valorización de su capital. Y no hablamos solo de inversiones financieras, sino incluso de las efectuadas en activos productivos.

Ello no quiere decir que los capitalistas nativos se hayan caracterizado por su vocación de construir bases económicas y sociales fuertes en la Argentina, ni por su decisión a enfrentar riesgos. Más bien, la ausencia de este tipo de empresarios hizo que fuera el estado el encargado de asumir las inversiones cruciales para el desarrollo capitalista moderno. La cultura rentística arraigada llevó a que la mayor parte del dinero obtenido por los empresarios que vendieron sus empresas en los noventa fuera al exterior y no se invirtiera para generar nuevos activos.

También señalamos con insistencia que la convertibilidad solo podía sostenerse con cada vez mayor y más arraigada desocupación, precarización laboral e imparable pérdida de derechos sociales. Denunciamos el fenomenal fraude que significaba la jubilación privada, que es uno de los principales lastres que explican el déficit presupuestario que arrastra la Argentina desde 1994 y que aceleró la caída de 2001. El sistema de AFJP implica un drenaje del orden de los 7.000 a 8.000 millones anuales para el erario público. Otra paradoja: se insiste con los costos improductivos de la AFIP, pero se oculta puntillosamente los descomunales gastos administrativos que insumen las AFJP y que estamos obligados a pagar. Vaya forma de introducir la capitalización individual privada: obligatoriamente. Claro, ahora no sostengo con mi dinero a burócratas públicos vagos o corruptos ... sino a arsenales de sonrientes señoritas y jóvenes de traje y celulares.

Pero, insistamos, el espejismo de la estabilidad y cierto acceso al consumo anestesiaron la capacidad de reacción de una porción muy importante de la sociedad, mientras silenciosamente se deslizaban hacia la pobreza 15 millones de argentinos.

¿Hoy cuáles son los planes en juego? Desde la perspectiva neoliberal no hay nada que ofrecer que pueda encontrar legitimación. El recetario fue aplicado en forma completa y ya no tienen otra cosa que pedir que un impopular nuevo ajuste. Por eso el FMI y los Estados Unidos juegan a hacerse los desentendidos y culpar de todos los males al más fácil chivo expiatorio: la clase política. Pueden decir, como Paul O'Neill sin sonrojarse, que la plata que falta en la Argentina se la robaron los políticos. Pegarle a los políticos, que bien se lo

merecen, es gratis. Y además, sirve para desviar la atención de los principales beneficiarios de un modelo que necesitó corromper para instalarse.

Pero ellos hoy saben que no se puede más hacer política legitimadora con la retórica del ajuste. Porque el ajuste ya llegó y no es algo que pueda aplicársele a los otros, los vagos, los corruptos o los ineficientes. El ajuste es más claramente que nunca falta de trabajo, de salud, de educación para la inmensa mayoría.

Fíjense otra paradoja. Mientras nos muestran que la falta de confianza en la Argentina arranca en los propios argentinos, que tienen 120.000 millones de dólares afuera, y que serían éstos los que deberían comenzar por invertir en su tierra, al mismo tiempo presionan para que no se investigue a los banqueros que permitieron esa fuga. Y en nombre de la seguridad jurídica. Claro, vociferan, debe haber reglas claras, previsibles, para atraer y asentar las inversiones, bla, bla. La ley de subversión económica que tanto los amarga porque los vuelve inseguros ... es de la época de Isabel Perón. O sea, tiene cerca de 30 años. Pero, ¡estos jueces son imprevisibles!

Entonces, que Duhalde "intervenga" políticamente la justicia, para evitar el abuso de que señores banqueros de países extranjeros tengan que descender a los escritorios de esos ignotos leguleyos de esta republiqueta insegura para explicar cómo operan sus prestigiosas instituciones. Nunca quedó tan claro como ahora que la llamada seguridad jurídica no es otra cosa que la adaptabilidad de normas y procedimientos a las necesidades infinitas e irrefrenables del capital. Lo que se reclama no es "seguridad jurídica" sino una muy difícil de obtener "seguridad política".

Las privatizaciones

Veamos un tema que conozco más: las privatizaciones. Mientras por un lado, y en nombre de la seguridad jurídica se pretende hacer valer las patentes de curso obtenidas de los negociadores de turno, por el otro se hace valer la teoría de la imprevisión para modificar todas las cargas pactadas.

Ahora los concesionarios pretenden renegociar sus contratos, a la ligera, presionando en virtud de las circunstancias para sacarse de encima las cargas e incumplimientos acumulados y preservar la crema de sus negocios globalizados. Quieren cambiar tarifas por menos calidad o inversiones y presionan para obtener seguros de cambio por las deudas contraídas en el exterior.

Pero no se pueden renegociar todos los contratos al mismo tiempo en un plazo breve si no se recupera capacidad de regulación y fiscalización efectiva. Es imprescindible revisar los contratos uno a uno en todas sus cláusulas y determinar los incumplimientos. La razonabilidad de las tarifas es un punto clave. Porque no se trata de que las empresas de servicios no recuperen sus costos, como sucedía antes, sino de que las tarifas reflejen exactamente estos y un plus irrazonable para el operador, medido en términos internacionales serios.

Claro, aquí aparece el tema tabú de los costos y la ganancia. Por eso no quieren audiencias públicas con presencia e intervención de los usuarios y sus asociaciones, por eso no quieren abrir las cajas negras de la contabilidad empresarial.

Hay preguntas cruciales: ¿cómo se conforma la deuda externa contraída por las empresas? ¿Para qué y con quiénes se contrajeron los préstamos? ¿Todo lo adeudado se invirtió en obras? ¿Cuáles son los componentes de los costos en dólares que no podrían reemplazarse por producción local? Una de las cuestiones importantes es que a las privatizadas se les

permitió proveerse de insumos en donde les fuera más conveniente. Así, se abandonaron muchos proveedores locales por otros vinculados con las empresas o los países de origen de los operadores privados. Eso genera una transferencia muy grande de divisas, que en muchos casos no tienen justificación. Una renegociación debería encarar este tema, alentando la utilización de la producción local.

También hay que ver el tipo de endeudamiento externo que contrajeron. Es preciso diferenciar las deudas de adquisición de la propia empresa, que tienen que ser íntegramente asumidas por sus dueños, de lo que son las deudas para hacer inversiones para expandir los servicios. Es preciso analizar con lupa con qué bancos y a qué tasas se contrajeron y con qué garantías, y si se invirtió efectivamente el dinero que se pidió prestado. Debe partirse, por otra parte, de los niveles de rentabilidad ya obtenidos por las empresas. Veamos algunos números.

Entre 1995 y 1999, las empresas de servicios públicos vendidas principalmente a multinacionales extranjeras obtuvieron ganancias por un total de 24.000 millones de dólares y se estima que para toda la década 1991 / 2001 las utilidades superaron los 34.000 millones.

Esto supera con creces los 23.000 millones de dólares que los consorcios invirtieron en la compra de empresas de teléfonos, gas, electricidad, ferrocarriles, carreteras, áreas petroleras y todo el resto de la infraestructura económica del país que anteriormente pertenecía al estado. Si se considera que al menos la mitad de los montos aportados en las adquisiciones y las inversiones siguientes fueron financiadas con deudas cuyos intereses se pagan del propio giro de negocios de las compañías, se puede concluir que el capital propio arriesgado por los compradores (el equity, en la jerga financiera) ya ha sido amortizado hace tiempo.

Las ganancias de algunas empresas privatizadas en la Argentina harían palidecer de envidia nada menos que al propio Bill Gates, el hombre más rico del planeta y cuya empresa, Microsoft, está considerada una de las más rentables del mundo, con un margen de ganancias que llega al 25% sobre sus ventas.

En la Argentina se ha superado ese récord. Si se observan los informes financieros de Transportadora de Gas del Sur (TGS), por cuyos tres gasoductos circula el 60 % del gas que se consume en el país, se advierte que el margen de ganancia en el año 1998, por ejemplo, alcanzó (suenen las trompetas) al 39,5 %. Fueron exactamente unas ganancias de 156 millones de dólares contra ventas por 395 millones. Dos años después, y ya en plena recesión, esta empresa controlada por Perez Companc y Enron (esta última actualmente en proceso de quiebra en Estados Unidos) tuvo un margen de utilidad de "sólo" el 26,3 %. El caso de TGS no es una excepción, sino más bien la regla.

Según un estudio del INDEC, las ganancias de las empresas privatizadas (que se han constituido como monopolios regulados) superan en más de dos veces y media la utilidad obtenida por el resto de las 500 mayores empresas de la Argentina, que operan en régimen de competencia: sus tasas de rentabilidad sobre patrimonio neto (otra forma de medir las ganancias) promedian un 12,7 %, comparado con el 4,9 % de las demás.

Cualquier empresario que compite en una sociedad capitalista podría considerarse feliz y exitoso si su margen de ganancias se acerca al 10 %. Algunas empresas, como los supermercados, trabajan con índices que no superan el 2 ó 3 % de sus ventas. Pero las ganancias de las empresas privatizadas en la Argentina son en realidad mayores de lo que se muestra en los balances.

Un detalle poco conocido de los contratos de privatizaciones es que estos permitieron el pago de "honorarios de administración" (management fee) a los operadores técnicos de las concesiones, que no son otros que las empresas multinacionales que controlan o encabezan los consorcios. Estos honorarios son cuantiosos y superan con creces cualquier pago razonable por un servicio técnico. Usualmente se contabilizan como parte de los "gastos de explotación" de las compañías (es decir que están exentos de impuestos). En otras palabras, se trata de ganancias encubiertas que se giran a las casas matrices eludiendo el pago del impuesto a las ganancias.

Estos honorarios son generalmente un porcentaje del 6 al 7 % del margen bruto de utilidad de las empresas. Telefónica de Argentina, por ejemplo, pagó 148 millones de dólares de management fee en 2000 a su operador técnico, Telefónica de España. Si a esto se le suman los 343 millones de dólares de ganancia neta que informó la compañía en su balance, se llega a un total de beneficios de 491 millones de dólares (16,6 % sobre ventas). Telecom le pagó a sus dos operadores técnicos, France Telecom y Stet (Italia) 130 millones de dólares en 2000 antes de contabilizar cualquier otro gasto, pago de intereses, amortizaciones, impuestos, etc. De modo que las dos grandes telefónicas que operan en la Argentina podrían no ganar un centavo en sus balances de algún año, y aun así, sus casas matrices seguirían recibiendo remesas de cuantiosas utilidades.

Gas Natural BAN (Buenos Aires Norte) le paga a su operador técnico, el consorcio catalán-estadounidense Invergas, siete millones de dólares anuales por honorarios de administración. Esta suma es un tercio de toda la masa salarial de la compañía, que facturó 450 millones de dólares en 2000 y ganó 54 millones (12 %). El caso de Aguas Argentinas es similar: pagó 18 millones de dólares en 2000 a su casa matriz, Suez Lyonnaise Des Eaux (subsidiaria del mega grupo francés Vivendi), en concepto de honorarios por un contrato de control de gestión y transferencia de tecnología que firmó en 1993. Las ganancias de Aguas Argentinas parecen inmunes a la recesión. En 1998 ganó 36 millones de dólares, al año siguiente 62 y en 2000 tuvo un récord de ganancias de 85 millones (16,5 % de las ventas, que sube al 20 % si se consideran los "honorarios técnicos"). Por contraste, Aguas de Barcelona, que integra el consorcio dueño de Aguas Argentinas como grupo reportó beneficios anuales del 5 % sobre ventas. El 15 % de estos beneficios -antes de impuestos- fueron generados por Aguas Argentinas.

Tan fuertes rentas no provienen de una extraordinaria eficiencia de los operadores sino de las condiciones en que se pactaron las concesiones. Estas incluyeron mercados cautivos y monopólicos con tarifas iniciales muy altas que fueron inmediatamente dolarizadas e indexadas por los índices de precios estadounidenses, amén de una muy débil regulación estatal. Las ganancias extraordinarias fueron el incentivo ofrecido a las operadoras por el gobierno de Carlos Menem para hacerse cargo de los servicios. Pero el correlato fue el mayor costo afrontado por los usuarios. La ley del casino se siguió cumpliendo: lo que unos ganan otros lo pierden.

Como durante la última década la tasa de inflación estadounidense superó holgadamente la nacional (en Estados Unidos los precios subieron entre un 15 y un 20%, mientras en la Argentina bajaron el 1%) , también se dio la paradoja de que los servicios se convirtieron en casi el único sector que pudo subir sus precios y eludir todos los riesgos de la operatoria económica que enfrentaron los demás.

Una investigación del área de economía de Flacso da cuenta de que los "ingresos ilegales" derivados de las indexaciones que acumulan las empresas hasta fines del 2000 superan los

9 mil millones de dólares. Claro que renegociar todo esto lleva un tiempo y un costo, que debería ser asumido por las empresas.

El artículo 9º de la ley de emergencia fija criterios de renegociación de todos los contratos. El primero es la influencia que tienen las tarifas de los servicios públicos sobre la competitividad de la economía y la distribución del ingreso. El otro, planteado en el artículo 13º, propone regular los precios de los mercados, sobre todo de los oligopólicos. Por ejemplo, el del petróleo, que tiene una influencia decisiva sobre la cadena energética (gas natural y energía eléctrica).

Pero para hacerlo hace falta estado. Hoy no lo tenemos porque lo destruyó el ajuste y el uso clientelar. Porque mientras el sector público se achicaba vía privatizaciones, el remanente quedaba para uso de los partidos, como suerte de cajas chicas -o no tan chicas- de los partidos. Hace falta capacidad técnica probada y probidad. Lo primero se puede conseguir haciendo concursos limpios y lo segundo, con transparencia absoluta de las decisiones de gobierno y control ciudadano genuino.

Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Está visto que los políticos que usufructúan de los cargos públicos para acumulación individual no están dispuestos voluntariamente a perder privilegios. Máxime en una época de gran crisis económica y social donde el empleo público es un refugio seguro y virtualmente único frente a la malaria general. Solo la imposición popular podría torcer estas prácticas tan arraigadas.

El malestar actual es generalizado. Pero no nos engañemos. No todos queremos lo mismo. Muchos están enojados porque no se cumple con la promesa de un capitalismo serio y primermundista con el que siguen soñando. No son pocos los que se van o quieren irse a buscar eso mismo en otros suelos. Hoy está abierta la oportunidad para mostrar en qué se convierten esos vanos sueños. Lo que no quiere decir que no puedan aparecer falsos atajos y nuevos espejismos.

Por ahora, parece que la crisis de hegemonía en el seno del bloque en el poder no logra articular una salida para la crisis que encolumne a todos en un mismo proyecto y arrastre, luego, a una porción de las clases subalternas. No tienen qué prometer, ni mucho menos qué dar a cambio del apoyo necesario. No son capaces siquiera de articular una mínima ayuda social para los más castigados. No parecen dispuestos a suscribir un compromiso. La Mesa que propicia la iglesia es un ejemplo palmario. Los exportadores agropecuarios ofrecieron rimbombantemente colaborar con 1.400 millones de dólares para ayuda social... Claro que a cambio de que no les pusieran retenciones. Cuando les aplicaron el 10 % gritaron furiosos y retiraron todo vestigio de ayuda caritativa. Argumentan que sólo quieren dar dinero -algo, el que sus conciencias les indique y puedan oblar voluntariamente- si se les asegura que llegará directamente a los necesitados y no se desperdiga en la maraña del aparato clientelar.

En algo tienen razón: el clientelismo espúreo e ineficiente degrada toda acción estatal. Pero detrás de esto está la excusa para no pagar los impuestos que corresponden y no ayudar a reconstruir la estructura pública idónea y racional que hace falta para gestionar cualquier ayuda social.

El camino alternativo

El camino alternativo, sin embargo, tampoco se avizora fácil. No puede ser reducido a la categoría de eslogan. Esta es una oportunidad histórica para demostrar las fallas del capitalismo y para afirmar la necesidad de transformar por completo el sistema social. Pero no puede eludirse que este camino será muy duro. Y siempre lo fue. La diferencia es que

hoy el poder no ofrece a cambio nada seductor, como en los 90. Las promesas fastuosas del discurso neoliberal se han desgastado en el mundo al compás de la demostración flagrante de la profunda inequidad que sus recetas le trajeron a los pueblos. Por eso crecen los movimientos antiglobalización y el descontento. Pero todavía falta mucho por recorrer y la Argentina está en el medio de un tiempo complejo y virulento.

La izquierda tiene que tener propuestas concretas. Pero ni hacer enunciados abstractos o generales ni descender a una disputa absurda sobre tecnicismos que no alteran las relaciones de poder sobre las que se asientan las supuestas medidas para salir de la crisis.

Las decisiones económicas siempre son políticas. Porque asumen y redefinen relaciones de poder muy claras. Insistimos, no hay respuestas técnicas aisladas de las condiciones de poder que las hacen posibles. Por eso es que siempre pueden sonar absurdas o utópicas las medidas que pretendan afectar a los intereses poderosos. Lo que pasa es que la realidad ya no admite eufemismos. Hoy por hoy, en la medida en que los poderosos no parecen dispuestos a hacer concesiones de ninguna especie, las cosas quedan muy claras. Las medidas que pretenden aplicar sólo apuntan a salvar al reducido núcleo de ganadores del sistema y a mantener a raya a los demás.

Porque no parece haber mucho margen para una salida concertada que permita, al menos, incorporar a una porción de las clases subalternas en el nuevo esquema de reparto de las cargas y ventajas sociales. No parece vislumbrarse un proyecto burgués -ni "nacional" ni transnacional- que logre erigirse como hegemónico y dar alguna salida medianamente exitosa que encolumne al conjunto. Las demandas sectoriales anárquicas priman sobre todo lo demás. Y el denostado estado vuelve a ponerse en primer plano. Las petroleras, por caso, no sienten el más mínimo rubor al reclamar públicamente que el estado les otorgue un seguro de cambio para afrontar sus deudas en dólares. Es decir, que el conjunto de la sociedad asuma como propio el riesgo de un negocio privado que, pequeño detalle, ¡genera ingresos en dólares!

En un acto en la UCA el jueves 14 de marzo, Jorge Forteza, número dos de Booz Allen y uno de los consultores más escuchados en el mundo de los negocios dijo: "el actor dominante de la economía no puede ser exclusivamente la empresa multinacional. No existe país que no tenga por lo menos 10 grandes grupos nacionales". "Los empresarios nacionales que quedan en pie son sobrevivientes y la sociedad argentina no hace nada por celebrar su existencia. En otros países erían héroes, pero aquí viven bajo permanente sospecha". En ese encuentro, Oscar Vicente, de Pérez Companc, pidió que el Gobierno participe de la negociación de los privados con sus acreedores externos. "Queremos que el estado esté presente en el problema de la deuda externa privada. Generar un paraguas común cuando nos sentemos a la mesa, antes de negociar cada empresa en forma individual. También queremos ver al Gobierno cuando negocia con sus acreedores, en términos de quita, tasa y tiempo".

Una pregunta clave es si podrá sobrevivir la democracia, si la represión necesaria para seguir deprimiendo el nivel de vida de la gente es compatible con instituciones formalmente democráticas.

La única alternativa es construir el poder popular necesario para enfrentar los intereses poderosos que hoy nos quieren condenar a descender aún mucho más en los niveles de vida y expectativas de nuestro pueblo. Ese poder se construye en la participación cotidiana, en la lucha social, política e ideológica en todos los frentes. El destino capitalista que se ofrece para la Argentina, convenzámonos de una vez, no es Australia. Se parece más a Venezuela, el Perú o el Ecuador. Veamos, entonces, si se puede torcer el rumbo.

Nos asustan con el fantasma de que si no viene la ayuda externa, se cae todo. Pero las condiciones que impone esa ayuda condenan al desastre a cada vez más personas. ¿Qué es, entonces, lo que hay que salvar? ¿En nombre de qué futuro se puede empujar a millones a la desaparición? ¿Quién cree que puede estar a salvo?

Si en cualquiera de los casos nos auguran un futuro tremendamente difícil y doloroso, ¿no habrá una forma de intentar un camino mas inclusivo? Cómo estamos, la plata no viene. Si viene, es para salvar a grandes grupos y para que sigamos expulsando gente a la indigencia.

¿Si reestatizamos la seguridad social se asustarán los capitales ya asustados? ¿Si aplicamos fuertes retenciones a las exportaciones petroleras, para además de obtener divisas para planes sociales y reconversión productiva, desestimulamos la sobreexplotación de un recurso no renovable que podría extinguirse en pocos años, nos harán algún boicot? ¿Si damos un paso más y recuperamos la renta petrolera, se nos vendrán encima los europeos, porque les quitamos el negocio? ¿Si se aplican las retenciones al agro que puso el "revolucionario leninista" Adalberto Krieger Vasena, para impedir la traslación de la devaluación al precio de los alimentos, se funde el campo? ¿Si nos ponemos duros con las privatizadas y reducimos su rentabilidad a límites "razonables" y compatibles con el bienestar general, van a abandonar la explotación y nos harán juicio? (antes, el miedo era que se espantaran otros capitales y no vinieran a invertir. Ahora ¿qué?) ¿Si fortalecemos la banca pública para que otorgue créditos a la actividad productiva genuina de las Pymes, nos excomulgarán en el Olimpo financiero? ¿Si promovemos un acuerdo igualitario y sustentable con el Brasil en el Mercosur, nos excomulgarán los promotores del ALCA? ¿Si sostenemos en serio la producción de medicamentos genéricos, nos comerán crudos las multinacionales farmacéuticas?

Tenemos que preguntarnos, también, ¿cómo haremos para convencer a los que fugaron la plata que la vuelvan a traer? ¿Servirá que vean cómo los más astutos capitales brasileños, con apoyo de su gobierno, vienen de compras por estas tierras a llevarse a precio de ganga fábricas enteras, que engarzarán muy rentablemente en sus cadenas productivas? Y, en todo caso, ¿seremos capaces de convencer a los ahorristas que están en el corralito para que dejen su dinero en el circuito y no lo fuguen a dólares, para reactivar la economía? Para todo ello hace falta fuerza política, proyecto y estado. La reconstrucción de un estado desquiciado, colonizado y paralizado por la ineficacia y la falta de rumbo debe ser hecha de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que debe asegurarse un control genuino de la sociedad respecto a la fijación de prioridades y a la ejecución concreta de las tareas encomendadas. No se trata de organizar asambleas interminables para que no resuelvan nada. Se trata de abrir efectivamente los mecanismos necesarios para el ejercicio de un control efectivo y posible de la acción pública. Si se establecen, por ejemplo, claramente cuáles son las tareas a realizar por cada oficina pública, se publicitan los antecedentes de cada persona que ocupa un cargo y se transparentan los gastos, las oportunidades de fraude y amiguismo se acotan enormemente.

Ahora bien, para hacer eso hace falta voluntad de dejar atrás hábitos culturales muy fuertes. El amiguismo, por ejemplo, que tiene su costado socialmente valorado: la lealtad, el deber de proteger y ayudar a los amigos cuando uno puede.